



EDITORIAL

Editorial

STELLA SCHROEDER ¹

Seguridad urbana en tensión: desafíos estructurales del urbanismo latinoamericano

En las últimas décadas, la seguridad urbana se ha convertido en uno de los temas más urgentes y complejos del debate sobre la ciudad en América Latina. La región concentra algunos de los índices más altos de violencia urbana del mundo y, aunque los niveles varían entre países, las causas estructurales —desigualdad, segregación espacial, informalidad e instituciones débiles— son ampliamente compartidas. Tradicionalmente abordada desde el ámbito policial o judicial, la seguridad comienza a ser entendida también como una cuestión urbana, vinculada a la forma, la gestión y la vida social de la ciudad.

La literatura reciente coincide en que la violencia y el temor no se distribuyen al azar: se concentran en territorios donde convergen precariedad, déficit de infraestructura, baja conectividad y ausencia del Estado. Davis (2020) advierte que en el Sur Global las formas contemporáneas de violencia se articulan con procesos de urbanización desregulada, generando territorios de vulnerabilidad donde la precariedad del hábitat y la informalidad producen “ciudades bajo riesgo”. Las condiciones espaciales —calles sin continuidad, iluminación deficiente, vacíos urbanos, equipamientos degradados— inciden tanto en la ocurrencia del delito como en la percepción de inseguridad. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un aumento de la delincuencia en los centros urbanos, lo que ha reducido su atractivo residencial y provocado su vaciamiento durante las noches y los fines de semana.

Chile no escapa a estas tensiones, aunque sus cifras de violencia sean inferiores a las de otros países de la región. Según la *Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana* (INE 2024), la victimización por delitos violentos se mantiene estable, mientras la percepción de inseguridad alcanza niveles históricos. Esta brecha revela que la inseguridad no responde solo a experiencias directas de violencia, sino también a procesos sociales más amplios: la pérdida de confianza en las instituciones, la fragmentación del tejido comunitario y la desigualdad territorial.

La planificación urbana enfrenta, en este contexto, un desafío complejo. Por una parte, debe analizar cómo las decisiones sobre uso del suelo, transporte y espacio público afectan la seguridad de los ciudadanos. Por otra, debe reconocer que la seguridad no depende exclusivamente del entorno físico, sino también de factores institucionales, sociales y simbólicos. Los estudios de Ceccato y Nalla (2020) demuestran que la experiencia del miedo en la ciudad está mediada por variables de género, edad y clase social, lo que exige un enfoque territorial sensible a la diversidad de los cuerpos y de las experiencias urbanas.

Entre los enfoques más influyentes de las últimas décadas destaca la *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED), que propone que principios de diseño como la visibilidad, el control de accesos, la delimitación de fronteras o el mantenimiento del espacio público pueden reducir el delito y mejorar la percepción de seguridad. Su aplicación, sin embargo, ha producido resultados dispares en América Latina. Investigaciones en barrios vulnerables (Rau et al. 2018) muestran que las mejoras físicas —iluminación, pavimentación o mobiliario urbano— solo generan impactos duraderos cuando se acompañan de apropiación social y gestión comunitaria. En contextos

¹ Doctora Arquitectura y Urbanismo
Académica e investigadora del Departamento de planificación y diseño urbano, Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño
Editora Revista Urbano.
Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile.
<https://orcid.org/0000-0001-8591-2719>
stella.schroeder@ubiobio.cl

DOI: <https://doi.org/10.22320/07183607.2025.28.52.00>

Figura 1, 2 barrio Yungay, Santiago de Chile. Fuente: Ignacio Bisbal

de alta desigualdad, la falta de mantenimiento y la débil institucionalidad pueden revertir rápidamente los beneficios de la intervención física.

La adopción acrítica de estos modelos, advierte Caldeira (2001), puede derivar en estrategias defensivas que profundizan la segregación. En su estudio sobre São Paulo, la autora describe cómo la proliferación de muros, cercos y barrios cerrados ha modificado las nociones de ciudadanía y espacio público, consolidando una "urbanización del miedo". Esta tendencia también se observa en ciudades chilenas, donde el aumento de condominios cerrados y dispositivos de seguridad privada refleja una desconfianza estructural hacia el espacio colectivo.

La seguridad urbana, por tanto, debe entenderse como un fenómeno relacional que articula forma urbana, estructura social y gobernanza local. Más allá de los enfoques técnicos, plantea un dilema político: ¿qué tipo de ciudad produce y reproduce inseguridad? Esta no se mide solo en tasas de delito, sino también en la sensación cotidiana de vulnerabilidad, en la imposibilidad de circular libremente y en la pérdida del espacio público como lugar de encuentro. La literatura urbana latinoamericana coincide en que la desigualdad espacial —más que la densidad o el crecimiento urbano— es el principal catalizador del miedo. Allí donde la ciudad se fragmenta, la inseguridad se instala.

En Chile, este fenómeno se manifiesta con especial fuerza en las periferias metropolitanas, donde la expansión residencial ha generado enclaves de aislamiento, baja conectividad y deterioro del espacio público. Más que zonas de riesgo delictivo, estos territorios expresan una fractura social y territorial: el debilitamiento de la vida colectiva y la ausencia de condiciones urbanas que favorezcan el encuentro y la confianza. La seguridad, en consecuencia, no puede reducirse a un problema policial, sino que debe entenderse como una dimensión profundamente espacial, vinculada a la forma de la ciudad y a las oportunidades que ofrece para habitarla.

Desde esta perspectiva, la seguridad urbana se configura como un indicador de justicia territorial. Allí donde existen equipamientos adecuados, transporte accesible y presencia institucional, la sensación de vulnerabilidad disminuye; por el contrario, en los espacios fragmentados o desatendidos, el temor se amplifica y refuerza las desigualdades. La experiencia latinoamericana —y particularmente la chilena— muestra que la inseguridad no surge solo del delito, sino también del malestar social y de las contradicciones del modelo urbano: la privatización de lo público, la pérdida de los espacios comunes y la distribución desigual de las infraestructuras han debilitado los vínculos comunitarios que sostienen la vida urbana.

Los avances más consistentes, por tanto, no provienen de estrategias tecnocráticas ni de una mayor vigilancia, sino de políticas que fortalecen la presencia estatal, recuperan el espacio público y reconstruyen la confianza entre ciudadanos y territorio. La seguridad urbana forma parte del derecho a la ciudad: garantizar una vida urbana digna, equitativa y libre de miedo es también una tarea del urbanismo. Más que administrar el control, esta disciplina tiene el desafío de comprender las causas estructurales de la inseguridad y de imaginar formas de convivencia capaces de devolver al espacio común su sentido colectivo.

Caldeira, Teresa. 2001. *City of Walls: Crime, Segregation, and Citizenship in São Paulo*. *American Ethnologist*. Vol. 29. Berkeley: University of California Press.
Davis, Diane. 2020. "City, Nation, Network: Shifting Territorialities of Sovereignty and Urban Violence in Latin America." *Urban Planning* 5 (3). Cogitatio Press: 206–16. doi:10.17645/up.v5i3.3095.
INE. 2024. "Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana." <https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/seguridad-publica-y-justicia/seguridad-ciudadana>.
Rau, Macarena, Ivan Cartes, Francisco Gatica, and Tim Pascoe. 2018. "Impact Evaluation of Situational Prevention Strategies and CPTED (Crime Prevention through Environmental Design) in Vulnerable Neighborhoods in Latin America." *Journal of Applied Security Research* 13 (4). Routledge: 437–54. doi:10.1080/19361610.2018.1498254.

